



## SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Radicado:** 05001-31-05-018-2019-00354-01 (O2-22-463)  
**Accionante:** LUZ MARY LÓPEZ VILLALBA  
**Accionada:** AFP PORVENIR S.A. y SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.  
**Procedencia:** JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Providencia:** SENTENCIA No. 083  
**Asunto:** PENSIÓN DE INVALIDEZ

En Medellín, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-018-2019-00354-01 (O2-22-463), instaurado por LUZ MARY LÓPEZ VILLALBA en contra de las sociedades AFP PORVENIR S.A. y SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., con el fin de resolver el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de la parte demandante, respecto de la sentencia que culminó la primera instancia, proferida el 09 de diciembre de 2022 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

### 1. ANTECEDENTES

La señora LUZ MARY LÓPEZ VILLALBA actuando a través de gestor judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de las sociedades AFP PORVENIR S.A. y SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., en procura de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 14 de julio de 2018, data en la cual cobró firmeza el dictamen de PCL emitido por la

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia – JRCIA, mesadas que a junio de 2019 ascendían a la suma de \$8.874.906.

En respaldo de sus aspiraciones señala que la sociedad SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., expidió dictamen para la determinación del estado de invalidez, fijando la PCL en un 50,49% y como fecha de estructuración el 04 de octubre de 2017. Anota que, por no encontrarse conforme con el resultado de la calificación de PCL que emitió la sociedad aseguradora, presentó impugnación al mismo para ante la JRCIA, a fin de que esta entidad anulara, modificara o repusiera el mencionado dictamen, teniendo en cuenta la decisión T-575 de 2015, la cual enseña que *“...la fecha de estructuración debe establecerse por la fecha en que efectivamente quedo(sic) impedido el afiliado para laborar y esa fecha lo dice la Corte Constitucional y es precisamente la fecha del ultimo(sic) aporte a pensión, para nuestro caso es mayo de 2006”*.

Precisa que el *“[e]l día 10 de mayo de 2018 emitido en audiencia privada la junta regional de calificacion(sic) de invalidez realiza un nuevo dictamen a la señora Luz Mary López Villalba, el cual se notifica el 31 de mayo de por medio de notificacion(sic) personal del mismo con Nro. 71765 con una PCL de 55,49%”*, advirtiendo que, por encontrarse de acuerdo con el dictamen de PCL, renunció a términos y no interpuso recurso de alguno, cobrando firmeza el valor porcentual otorgado en la valoración técnica, a partir del 14 de julio de 2018.

### **1.1. Trámite de primera instancia**

La demanda se admitió el 27 de junio de 2019 (págs.91 y 92, doc.01, carp.01), y se notificó a la demandada AFP PORVENIR S.A. el 09 de septiembre de 2019 (pág.133, doc.01, carp.01).

Las convidadas a juicio, sociedades AFP PORVENIR S.A. y SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., al momento de dar respuesta al escrito incoativo aceptaron como ciertos los hechos que hacen referencia a las calificaciones de PCL de las que fue objeto la demandante. Es así que la administradora del RAIS se opuso a la prosperidad de las pretensiones, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que postuló como falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, compensación, prescripción y no causación de intereses de mora (págs.154 a 175, doc.01, carp.01). Por su parte, la sociedad aseguradora, invocó las que nominó como falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas y prescripción (doc.10, carp.01).

### **1.2. Decisión de Primera Instancia**

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 09 de diciembre de 2022 (docs.31 y 32, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, en la que resolvió absolver a las convidadas a juicio de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por parte de la señora LUZ MARY LÓPEZ VILLALBA.

Para sustentar su decisión, la cognoscente de primer grado luego de identificar la disposición legal que regula la pensión de invalidez a la que aspira la demandante y la fecha de estructuración de dicho estado, concluyó que aquella no reunió los requisitos necesarios para la prosperidad de sus pedimentos, particularmente en lo que a la densidad de semanas respecta.

Prosigue indicando que, conforme con lo señalado por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, se requiere contar con un mínimo de 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez el afiliado. Por tanto, al no cumplir la actora con este requisito, no es posible dispensar la prestación económica a su favor. Adicional a ello, la *a quo* consideró que el dictamen emitido por la junta calificadora cuenta con pleno valor probatorio y por ello, mantuvo el porcentaje de PCL y la fecha de estructuración allí estipulada (minuto 36:52 a 58:00, doc.31, carp.01).

### **1.3. Grado Jurisdiccional de Consulta**

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia, fue totalmente adversa a los intereses de la afiliada, la sentencia será examinada bajo el grado jurisdiccional de consulta, en favor de la demandante, al no ser objeto de alzada.

### **1.4. Trámite de Segunda Instancia**

El grado jurisdiccional de consulta se admitió el 16 de enero de 2023 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 30 de ese mismo mes y año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del caso.

El procurador judicial de SEGUROS ALFA S.A. (doc.04, carp.02), presentó las alegaciones pertinentes solicitando se *“...confirme el fallo absolutorio de primera instancia, tras considerarse que la parte actora no ostenta la calidad de beneficiaria de la prestación de invalidez, en tanto no se hallan configurados los elementos de hecho o de derecho para el beneficio prestacional en favor de esta”*; destacando que si bien la actora cuenta con una PCL superior al 50%, la fecha de estructuración del estado de invalidez que le fijada se circunscribe al 22 de octubre de 2013; de ahí que, al sólo obrar cotizaciones al SGSSP hasta el año 2006,

no hay lugar a acceder a la prestación económica pretendida. También adujo que “[l]a F.E fue en el 2013 lo que no puede retrotraerse al 2006 y darse el reconocimiento de la pensión, por cuanto apenas en ese momento la enfermedad estaba en evolución o tenía un primer diagnóstico”; para posteriormente concluir que “...una PCL residual se exige que se hayan hecho cotizaciones después de la F.E dictaminada, y en el presente caso, la actora solo cotizó hasta el año 2006, es decir, mucho tiempo antes de la fecha de estructuración emitida”

## 2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta favor de LUZ MARY LÓPEZ VILLALBA, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

### 2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a establecer si a la señora LUZ MARY LÓPEZ VILLALBA le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez a partir de la fecha de su última cotización al SGSSP, efecto para el que será necesario establecer cuáles son los requisitos que el afiliado debe acreditar para la causación y disfrute de la referida prestación, con arreglo a las premisas normativas y criterios jurisprudenciales que rigen la materia. Asimismo, la Sala se ocupará en determinar en el asunto puesto a la palestra, la validez y eficacia del dictamen de PCL traído con la demanda como sustento cardinal de los pedimentos y conforme con los principios que informan la sana crítica.

### 2.2. Sentido del Fallo – Tesis de la Sala

La Sala confirmará decisión de primer grado, considerando que la impulsora del juicio no demostró con la suficiencia requerida la necesidad de apartarse de la fecha de estructuración del estado de invalidez que fuera determinada por la JRCIA para el 22 de octubre de 2013, máxime cuando no es posible desestimar los resultados del dictamen traído a juicio por razón de elucubraciones sin apoyo en conceptos técnicos o científicos. De ahí que, al no contar la promotora judicial con la densidad mínima de semanas cotizadas en el lapso exigido por la ley, no hay mérito para dispensar el reconocimiento de la prestación económica que en esta oportunidad se reclama.

### 2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las

consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la litis planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que LUZ MARY LÓPEZ VILLALBA nació el 09 de marzo de 1970 (pág.85, doc.01, carp.01); págs.13 y 132, doc.36, carp.01), que durante el periodo de diciembre de 2001 a mayo de 2006 cotizó un total de 231 semanas en el RAIS administrado por la AFP PORVENIR S.A. (págs.29 a 30 y 168 a 170, doc.01, carp.01), y que la AFP PORVENIR S.A. el 05 de octubre de 2018, le reconoció y pagó la suma de \$10.791.455 a título de devolución de saldos (págs.171 a 175, doc.01, carp.01).

Adicionalmente no se cuestiona que la aseguradora SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. el 10 de diciembre de 2017 expidió dictamen de PCL, donde concluyó que la actora presentaba una PCL del 50,49%, tomando como fecha de estructuración del estado de invalidez el 04 de octubre de 2017 (págs.14 a 17, doc.01, carp.01; págs.13 a 19, doc.10, carp.01); conclusión que fuera impugnada ante la JRCIA, organismo que el 10 de mayo de 2018 desató el disenso, resolviendo que la actora presentaba un 55,49% de PCL y como fecha de estructuración el 22 de octubre de 2013 (pág.21 a 25, doc.01, carp.01).

### **2.3.1 De la Pensión de Invalidez**

El Sistema Integral de Seguridad Social fue concebido como *“el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, a disposición de las personas y la comunidad entera para garantizar un nivel de calidad de vida digna, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar cobertura integral a todas las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de*

*los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad” (Ley 100 de 1993, Preámbulo).*

El Sistema General de Pensiones, fue a su vez diseñado para garantizar a la población colombiana el amparo ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte, reconociendo para ello una prestación económica denominada pensión, otorgada por la entidad administradora del régimen al que se hubiere vinculado el afiliado, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen que resulte aplicable a cada afiliado (artículo 1º de la Ley 100 de 1993).

En ese orden, es de precisar que el legislador no previó un régimen de transición en la prestación pensional por invalidez, como si lo estableció para la de vejez en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin perjuicio, desde luego, del principio constitucional de la condición más beneficiosa, el cual admite, de manera excepcional y bajo condiciones específicas, acudir a la normativa inmediatamente anterior que gobernaba el reconocimiento de la prestación, como bien lo ha explicado de manera reiterada la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias SL2358 y SL4650 de 2017.

Así se desprende de lo asentado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que por regla general, las disposiciones legales de seguridad social que resultan aplicables para resolver el reconocimiento de esta prestación de invalidez corresponden a aquellas que se encuentren en vigor a la fecha de estructuración de este estado, acogiendo así las reglas de aplicación inmediata de la ley y el efecto retrospectivo propio de las normas de seguridad social.

Memora la Sala lo anterior, para denotar que en el *sub lite* se acreditó que la señora LUZ MARY LÓPEZ VILLALBA fue calificada con una PCL igual al 55,49%, fijándose como hito de estructuración el 22 de octubre de 2013 (págs.21 a 25, doc.01, carp.01), lo que de suyo comporta que, las reglas para determinar la existencia del derecho a la pensión de invalidez se encuentran contenidas, para el caso del RAIS, en el artículo 69 de la Ley 100 de 1993, que itera idénticos requisitos al RPMPD, el cual fija las reglas vigentes a la fecha de estructuración del estado de invalidez del accionante.

En aplicación de las máximas que gobiernan las aspiraciones de la promotora, es menester para la prosperidad de las mismas, la demostración en juicio de las siguientes condiciones: i. padecer un estado de invalidez, o lo que es lo mismo, haber perdido el 50% o más de su capacidad laboral por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente (artículo 38, Ley 100 de 1993), y; ii. haber cotizado al menos 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la contingencia, a menos que, el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para

acceder a la pensión de vejez, supuesto en el que sólo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en el mismo lapso (artículo 39, Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 860 de 2003).

Bajo esos lineamientos normativos, en este caso está suficientemente traslúcida la prueba del estado de invalidez como primer presupuesto al que se hizo mención en el punto inmediatamente anterior, teniendo en cuenta la PCL de 55,49% que le fuera asignada a la convocante por parte de la JRCIA (págs.21 a 25, doc.01, carp.01) y que, a todas estas, no fue discutida. No ocurre lo mismo, en lo atinente a la densidad de semanas de cotización, pues a pesar que no se desconoce que la señora LUZ MARY LÓPEZ VILLALBA aportó durante toda su vida laboral un total de 231, lo cierto es que no efectuó cotización alguna durante los tres años anteriores a la invalidez, esto es, el lapso comprendido entre el 22 de octubre de 2010 y el 22 de octubre de 2013, por lo que en principio las pretensiones de la accionante no están llamadas a prosperar.

En este horizonte, memora la Sala que, la parte actora esgrime como argumento capital de sus pedimentos, la aplicación de la sentencia T-575 de 2015, para de esta manera procurar la modificación de la fecha de estructuración de la invalidez plasmada en el dictamen de la JRCIA, pasando del 22 de octubre de 2013 al 31 de mayo de 2006, fecha ésta que corresponde a su última cotización al SGSSP.

Bajo este derrotero y frente a la validez y fuerza demostrativa de los dictámenes emitidos por las juntas calificadoras y demás organismos del SGSS, se hace necesario explicar que, conforme con lo previsto por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, “[c]orresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos [Laborales] – AR[L]-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias; pudiendo acudir a las juntas regionales de calificación de invalidez y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el evento en que uno de los interesados, bien que, fuese la persona calificada o sus beneficiarios en caso de muerte, la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Riesgos Laborales, la Administradora del Fondo de Pensiones o Administradora de Régimen de Prima Media, el empleador o la compañía de seguro que asuma los riesgos de invalidez, sobrevivencia y muerte, si se presentara disenso frente a la fecha de estructuración de la contingencia, su origen o el porcentaje de la PCL asignado; aclarando la Sala que, en últimas, las controversias que se suscitan en relación con los dictámenes en firme, emitidos por los organismos calificadores, se dirimen por la justicia ordinaria (artículo 44 del Decreto 1352 de 2013).

En ese orden de ideas, el dictamen emitido por las juntas de calificación de invalidez no pueden ser prueba única, solemne o tarifada para determinar la pérdida de la capacidad laboral, pues tal y como lo ha reiterado el órgano jurisdiccional de cierre, el citado dictamen “... *no es más que un experticio que la ley estableció debía ser practicado por determinados entes, lo cual difiere claramente de lo que es una prueba solemne*” (CSJ SL-24392 del 29-06-2005, SL31062 del 18-03-2009, SL-35097 del 06-03-2012, SL-351 del 15-05-2013, Radicado 37616, SL-5622 del 09-04-2014, Radicado 52072, y SL-42451 de 2016, SL-877 del 26-02-2020, Radicado 73738, SL-2756 del 29-07-2020, Radicado 72895); dentro de una línea jurisprudencial en la que además se reiteró que “...*al no estar en presencia de un medio probatorio solemne, al Juzgador de alzada le era permitido, conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba, acoger aquellos elementos de convicción que le den mayor credibilidad o lo persuada mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso, en atención a lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social*”; precisando en sentencias SL877 de 2020 y SL2568 de 2020 que, *si el juez, para definir una determinada controversia, se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles, **podrá escoger para fundamentar su decisión aquél que le merezca mayor credibilidad**, todo, se insiste, dentro del marco de libertad probatoria que le asiste de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.* -Negritas intencionales de la Sala-

De igual forma, la jurisprudencia laboral también ha sido pacífica y reiterativa al indicar que aunque los jueces del trabajo tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos que estructuran la invalidez calificada, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto “*Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las deficiencias, discapacidades y minusvalías*” (CSJ SL del 19-10-2006, radicado 29622, SL-16374 del 04-11-2015, radicado 53986SL-5280 del 31-01-2018, radicado 76993, SL-1044 del 20-03-2019, radicado 68074, y SL2349 del 28-04-2021, radicado 83859).

Desde esa perspectiva, al ponderar la Corte Suprema de Justicia la base científica y conclusiva de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, sostuvo que el juez “... *debe comprender el tema probatorio, primero, desde el perfil científico que lo identifica y distingue, y luego interiorizarlo, arropándolo con el manto jurídico y las consecuentes derivaciones, que provocará la sentencia, sin olvidar que la potencial relevancia de la prueba científica para esclarecer el hecho o para establecer la convicción sobre la verdad del hecho, no es desde luego absoluta [...] No se le puede pedir al Juez que posea una sapiencia igual o superior a la del perito, por lo que el control de la prueba, debe realizarse mediante el análisis del grado de aceptabilidad de los conocimientos entregados o por la racionalidad del procedimiento y*



*conclusiones, ponderando con cautela y guiándose por el esquema racional que le permitirá, a través de las reglas de la sana crítica, calibrar y establecer el mérito del medio persuasivo.*

*Recuérdese al efecto que, como lo ha dicho la Corte, “es la propia ley la que a esa función le señala confines, imponiendo el razonamiento del análisis respectivo, así como el deber de considerar la firmeza, la precisión y la calidad de los fundamentos del dictamen y los demás elementos probatorios que obren en el proceso (artículos 187 y 241 del CPC), luego la mencionada autonomía no puede ser convertida en arbitrio por defecto, ya que la actitud del juez, frente a la prueba, jamás podrá ser pasiva sino, muy al contrario, dinámica, activa y acuciosa” (CSJ SC-Sentencia del 02 de agosto de 2002, radicación 6148).*

*El estudio de la contradicción de la prueba por error grave se justifica en aquellos casos en que aparezca con notoriedad que el perito no aplicó su propio discernimiento, omitió o utilizó reglas distintas del conocimiento, no vio, supuso o cercenó la materia del dictamen” (CSJ SC-7817 del 15-06-2016, Radicado 11001310303420050030101).*

Bajo ese horizonte, es dable concluir que, por regla general, la prueba idónea para determinar la calificación de la pérdida de la capacidad laboral será el dictamen que se realice por las entidades competentes y conforme con el manual de calificación vigente a la data de evaluación, dictamen que deberá estar sujeto, en su contenido, a las directrices previstas en el artículo 40 del Decreto 1253 de 2013, hoy compilado en el artículo 2.2.5.1.38 del Decreto 1072 de 2015. Empero, tal y como se expuso en líneas precedentes, las conclusiones o valoraciones vertidos en esta prueba científica pueden ser controvertidas, sin perder de vista que “...el ejercicio de discutir y desvirtuar las conclusiones técnicas y judiciales al respecto debe ser seria, responsable y suficientemente justificada<sup>1</sup>”; de ahí que, era deber de la parte interesada allegar al plenario, conforme con lo delineado por el artículo 167 del CGP, los elementos de persuasión que, con suficiencia, llevaran al juzgador al pleno convencimiento de la necesidad de prescindir del concepto técnico científico rendido por la entidad competente, en este caso, la JRCIA y en su lugar, variar la fecha de estructuración del estado de invalidez.

Al examinar el expediente y las pruebas regular y oportunamente allegadas, cristalino se muestra que la parte actora no cumplió con el deber probatorio que le incumbía, nótese que no arrió prueba alguna que diera cuenta que, ciertamente, el dictamen rendido por la JRCIA adolece de una infracción al artículo 3<sup>2</sup> del Decreto 1507 de 2014 que define el concepto de fecha de estructuración de la enfermedad, accidente o del estado de invalidez, máxime cuando

<sup>1</sup> Corte Suprema de Justicia de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL697 de 2019.

<sup>2</sup> **Decreto 1507 de 2014, artículo 3. Definiciones.** Para efectos de la aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: (...) **Fecha de estructuración:** Se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional. Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no exista historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral.

el mencionado organismo calificador, justificó la data de estructuración declarada en la “[f]echa del concepto del Dr Marco Terragoza otero de Oncomedica SA donde constan las secuelas por las patologías calificadas ajustadas a los procesos de rehabilitación y la mejoría máxima médica, folio 168” (pág.25, doc.01, carp.01), ajustándose así al precepto legal aplicable a las valoraciones científicas de esta estirpe. La anterior falencia probatoria no se supera con la historia clínica que fuera arrojada en el tracto procesal (págs.31 a 74, doc.01, carp.01), en la medida en que, como bien lo ha decantado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, “...**[e]s cierto que la historia clínica brinda elementos que permiten conocer los dictámenes, patologías, tratamientos y terapias a las que se ha sometido el accionante desde la anualidad de 1997; pero también lo es que de la misma no es posible inferir directamente la fecha de estructuración de su invalidez. Para ello se requiere de un instrumento médico, técnico y científico que permita constatar la forma en que evolucionaron sus dolencias oculares y auditivas; debe estar respaldado en un método convalidado por la comunidad científica, e incorporar un análisis minucioso y objetivo de todos los elementos del expediente clínico**”. -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

Así las cosas, no es posible, como lo pretende la actora, acoger la fecha del último aporte como última calenda para contabilizar la densidad mínima de cotizaciones necesaria para causar el derecho a la pensión de invalidez, puesto que la fecha de estructuración del estado de invalidez de la señora LUZ MARY LÓPEZ VILLALBA se consolidó en un momento concreto y claramente determinado y acorde con el artículo 3 del Decreto 1507 de 2014, como así lo adujo el dictamen de PCL aportado.

El anterior ejercicio conclusivo no varía por motivo de las consideraciones inmersas en la sentencia T-575 de 2015, pues en esa decisión se resolvió la vulneración de los derechos fundamentales de un paciente que: i. “[p]adecía de insuficiencia renal crónica terminal por nefropatía hipertensiva y, desde el 14 de mayo de 2011, se encuentra en terapia de reemplazo renal –hemodiálisis–, tres veces por semana, en la unidad renal del Hospital San Carlos de la ciudad de Bogotá”; ii. “Debido a sus graves quebrantos de salud, el 4 de marzo de 2014, fue calificado con pérdida de capacidad laboral del 72.77%, por enfermedad de origen común, con fecha de estructuración del 14 de mayo de 2011, y; iii. Acreditó un total de 560,73 semanas cotizadas durante toda su vida laboral, incluyendo los aportes efectuados en fecha posterior a la pérdida de su capacidad de trabajo; situaciones fácticas que no guardan similitud ni correspondencia al caso que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala, y siendo ello así, no puede aplicarse como precedente judicial por no corresponder al mismo patrón fáctico.

Corolario de lo expuesto, y atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes expuestas, se dispondrá por la Sala la confirmación de la sentencia de primer grado, en cuanto

absolvió a las demandadas AFP PORVENIR S.A. y SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por parte de la señora LUZ MARY LÓPEZ VILLALBA.

### 3. COSTAS

De conformidad con el amparo de pobreza que en los términos y para los efectos del artículo 154 del CGP le fuera concedido a la señora LUZ MARY LÓPEZ VILLALBA, no hay lugar a imponer a su cargo condena en costas.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### 4. RESUELVE


**PRIMERO:** CONFIRMAR la sentencia proferida el 09 de diciembre de 2022 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por LUZ MARY LÓPEZ VILLALBA, en contra de AFP PORVENIR S.A. y SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

**SEGUDO:** SIN COSTAS en esta instancia.

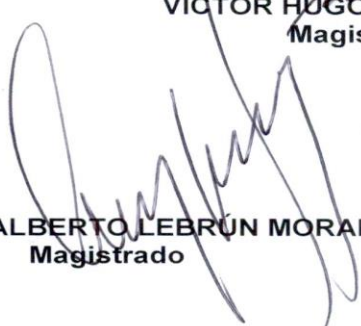
Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogiéndose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**  
Magistrado Ponente



**CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES**  
Magistrado



**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**  
Magistrada

**CONSTANCIA SECRETARIAL**

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario